

INSTRUCTIVO

005/2014 - PRESIDENCIA - TSJ

De: Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez
PRESIDENTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

A: **PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA Y JUECES DE INSTRUCCIÓN CIVIL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

OBJETO: **ADMISIBILIDAD DE DEMANDAS EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 247 DE REGULARIZACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO SOBRE INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA.**

FECHA: 18 de marzo de 2014.

Ante la consulta presentada a este máximo Tribunal de Justicia, por los Jueces de Instrucción Civil, competentes para la aplicación de la Ley Nº 247, Ley de Regularización de Derecho Propietario sobre Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, inquietud referida a la imposibilidad de admisión de solicitudes de regularización por lo señalado en el art. 9 de la citada norma, que expresa: "Están legitimadas y legitimados para accionar las poseedoras beneficiarias y poseedores beneficiarios en un plazo de dos años, computables a partir de la publicación de la resolución suprema de homologación de la norma Municipal que aprueba la delimitación del radio urbano o área urbana." En ese contexto, se considera:

Que el art. 6 inc. a) de la Ley Nº 247 establece: "Los Gobiernos Autónomos Municipales a efectos de la regularización del derecho de propiedad que apliquen la presente ley, deberán delimitar sus radios o áreas urbanas en un plazo no mayor a un año a partir de su publicación". (5 de junio de 2012). Si analizamos a detalle el artículo transcrito, identificamos que éste manda a los Gobiernos Municipales contar con la resolución de homologación de su radio urbano a efecto de la regularización. Es así, que se debe entender que como en el caso de la ciudad de Santa Cruz (capital) consultante, el municipio ya cuenta con la Resolución Suprema de Homologación de Radio Urbano desde el año 2003, aspecto éste que aparentemente no fue precisado por la Ley Nº 247.

Sin embargo, en dicho examen contextualizado, se tiene que la verdadera legitimación se da a partir del registro de la persona beneficiaria en el Registro del PROREVI de acuerdo al art. 14 del DS. 1314, con relación al art. 5 de la Ley Nº 247. En seguida, la misma ley en su art. 10 numeral 3 del párrafo I, hace una diferenciación de los bienes inmuebles urbanos sujetos a regularización que se encuentren situados: a) dentro de los radios urbanos "o" b) áreas urbanas homologadas.

Los Gobiernos Municipales en todo el país, en aplicación del ya mencionado art. 6 de la Ley Nº 247, tienen la obligación de incorporar otras áreas de vivienda a su radio urbano, áreas que en su oportunidad también serán sujetas al ámbito de aplicación de la ley de regularización.

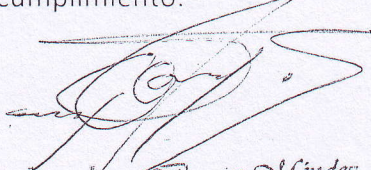
En este sentido, el juzgador debe hacer una interpretación de la ley en base a dos elementos:

1. El primero, desde la estructura teórica doctrinaria (CPE).- El juez debe ponderar o valorar desde la CPE en la dimensión que ofrece en su art. 180, basado en principios procesales (ESTO QUIERE DECIR, FUNDAMENTADO). Con la reserva legal del art. 109 que menciona "los derechos reconocidos en la Constitución son de APLICACIÓN DIRECTA". En este entendido, según el art. 115, la tutela judicial efectiva a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe ser protegida oportunamente y efectivamente por los jueces y tribunales. Sin duda alguna esta argumentación sincrónica tiene su base operativa o (Legitimación) en el art. 15, parágrafo I de la LOJ, que menciona: "... en materia judicial la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria...", además de lo que señala en el mismo cuerpo legal en su parágrafo III "... la autoridad jurisdiccional no podrá alegar falta, obscuridad, insuficiencia de la ley o desconocimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales para justificar su vulneración..." (Ninguna ley es negatoria de ella misma "per se"), siguiendo con el segundo elemento tenemos;

2.- Desde la estructura orgánica de la misma ley.- un artículo jamás se podrá interpretar de forma descontextualizada o fuera del contexto de la misma norma, esto quiere decir que su interpretación debe estar exclusivamente sincronizada con el objeto y finalidad que persigue la misma, de lo contrario perdería la esencia de su espíritu para el cual fue creada;

Por lo que se instruye a los jueces de Instrucción Civil, en aplicación de la CPE, LOJ y Ley Nº 247, admitir la solicitudes de regularización de derecho propietario urbano destinado a vivienda, entendiéndose que la legitimación activa para iniciar el trámite de regularización no está sujeta a la fecha de aprobación de la Resolución Suprema que aprueba la delimitación del radio urbano, sino al fin y objetivo de la norma de regularización, siendo deber de todos los jueces, adecuarse a la nueva realidad jurídica social con capacidad de materializar la justicia, por lo que deberán interpretar, valorar sus resoluciones en base a los dos elementos considerativos que se dan en el presente instructivo.

Es cuanto se instruye para su cumplimiento.



Jorge Iván Bories Méndez
PRESIDENTE
Tribunal Supremo de Justicia